

## **Las gestiones para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Luego de la asunción de Carter en Estados Unidos en enero de 1977, la diplomacia norteamericana comenzó a presionar al gobierno argentino para que aceptara una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La visita de la comisión era promovida entre otras medidas que buscaban garantizar el respeto de los derechos humanos en la Argentina. Pero los representantes argentinos consideraron que esta visita era una opción preferible a las otras medidas impulsadas (publicación de las listas de detenidos, castigo a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones a los derechos humanos). De este modo, representantes argentinos comenzaron a indagar ante sus interlocutores norteamericanos cuáles serían las condiciones de esa visita, aunque sin dar una respuesta definitiva a si la misma sería aceptable para el gobierno argentino, se trata de una primera etapa de sondeos por parte de los argentinos (ver documento 0000A15E.tif). En noviembre de 1977 el secretario de estado norteamericano Cyrus Vance visitó a la Argentina y se reunió con representantes argentinos. El subsecretario de relaciones exteriores contralmirante Walter Allara dijo ser optimista sobre la posibilidad de una visita (ver documento 0000A457.tif).

El gobierno norteamericano buscó promover la visita asegurando al gobierno argentino que luego de la aceptación de una inspección de la CIDH se ocuparía de destrabar los créditos militares que el congreso norteamericano rechazaba a causa de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. En mayo de 1978, luego de que Videla se mostrara favorable a una visita el gobierno norteamericano el subsecretario de estado norteamericano recomendaba decir a Videla que luego de la visita la administración de Carter se reuniría con miembros del congreso para reanudar la venta de equipamiento militar a la Argentina (ver documento 0000A6C2.tif).

A comienzos de 1978 comenzaron las negociaciones entre el gobierno argentino y la CIDH en torno a las condiciones de la visita. En mayo de 1978, en ocasión de la visita del subsecretario de estado norteamericano David Newsom el presidente Videla la anunció al secretario que había instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores a anunciar la aceptación argentina a una visita de la CIDH (ver documento 0000A6C2.tif). En junio de 1978 el canciller Oscar Montes viajaba a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA para negociar las condiciones de la visita. La idea del gobierno argentino era que sólo se permitiría a la delegación de la comisión reunirse con funcionarios del poder judicial y del poder ejecutivo pero no podría reunirse con individuos privados ni con organismos de derechos humanos ni visitaría cárceles (ver documento 0000A60F.tif). Durante el viaje del canciller a Washington en el que también participó el subsecretario de relaciones exteriores Walter Allara mantuvieron reuniones con el subsecretario David Newsom para negociar qué estaría dispuesto a dar el gobierno norteamericano a cambio de una aceptación por parte de la Argentina de la visita de la CIDH, los delegados argentinos plantearon que luego de la aceptación de la visita la Argentina recibiera créditos para fines no militares de parte del Eximbank (ver documento 0000A615.tif y 0000A619.tif). La Argentina no consiguió llegar a un acuerdo con la CIDH y como consecuencia el gobierno norteamericano denegó los créditos del Eximbank (ver documento 0000A618.tif).

La decisión norteamericana provocó el rechazo de parte de los militares argentinos, que a principios de agosto presentaron una nota formal de protesta al embajador norteamericano Raúl Castro (ver documento 0000A802.tif). Sin embargo, las negociaciones continuaron y luego de un encuentro entre Videla y Mondale en Roma en ocasión de la

asunción del Papa Juan Pablo II acordaron que la Argentina aceptaría una visita de la CIDH y a cambio el gobierno de Washington destrabaría la garantía del Eximbank para el crédito necesario para la compra de las turbinas hidroelécticas (ver documentos 0000AA13.tif y 0000AB3C.tif).

Concertada la misión, el gobierno comenzó los preparativos para detener la represión ilegal al momento de la visita, o, en palabras de Viola, para “limpiar la casa” (ver documento 0000AB40.tif). De este modo, distintos sectores de las fuerzas armadas creyeron que la visita traería resultados satisfactorios para el gobierno argentino, mientras que otros creían que la visita no podría resultar exitosa (ver documento 0000A979.tif).

Por el lado de la diplomacia norteamericana se buscaba que de la visita resultara un informe no muy “duro” con el gobierno argentino para que fortaleciera la posición de los moderados, Videla a la cabeza. Se trataba del sector “conciliador” del Departamento de Estado que buscaba una mejora en la situación de los derechos humanos, pero también un fortalecimiento de la hegemonía de los moderados en el gobierno argentino. Incluso funcionarios del Departamento de Estado reuniones informales con miembros de la comisión para promover que la evaluación hacia la Argentina no fuera demasiado crítica. Se temía que un informe negativo generara un fortalecimiento de los militares duros, como los generales Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez (ver documentos 0000AB88.tif y 0000AD91.tif). En marzo de 1979, el consejero político de la embajada norteamericana en Argentina Maxwell Chaplin expresaba sus objetivos y los de los sectores “conciliadores” de Washington en los siguientes términos:

*“Estamos satisfechos de que el embajador Vaky haya acordado en (tener) cuidadosas discusiones informales con la CIDH. Esta visita tiene una importancia constantemente creciente en la Argentina, y (también) para nuestros objetivos políticos. Un pensamiento que no sobrevivió claramente en el borrador final de Buenos Aires 850 (referencia al código de un cable) es que la comisión debería ir más allá de una simple condena a las malas conductas argentinas y tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno argentino en algunos precisos pasos para remediar la situación. Yo creo que si las críticas al gobierno argentino no son demasiado duras, el reporte de la comisión podría tener un importante impacto positivo al comprometer a los argentinos en un diálogo o en un compromiso de llevar a cabo pasos que deben tomar los argentinos para restaurar la observancia de los derechos humanos. Si la Argentina es simplemente tratada como un paria, la reacción política interna podría ser desfavorable, tanto para Videla y Viola como para la mejora de las prácticas de seguridad”.*

Las negociaciones entre el gobierno argentino y la comisión generaron profundos conflictos internos dentro del régimen militar. El gobierno, comandado por el sector moderado del ejército, promovía activamente la visita. Entre los militares que se mostraban favorables a la visita se encontraban el presidente Videla, el general Viola, y otros militares y funcionarios cercanos a ellos. La Marina se oponía a la visita, y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores buscó impedir el acuerdo (ver documentos 0000AB2F.tif, 0000ABBA.tif, 0000A0D3.tif, 0000AB88.tif). La visita también contó con la oposición de los sectores duros del ejército, como los generales Suárez Mason y Menéndez (ver documento 0000AB40.tif). Pocos meses antes de la visita, Maxwell Chaplin, escribía a un par suyo del Departamento de Estado describiendo las diferentes posiciones existentes

dentro de las fuerzas armadas respecto a la visita de la CIDH. Estas eran las palabras de Chaplin:

*“El punto más importante que hay que decir es que no hay una “actitud del gobierno argentino” hacia la visita. Como recordarás, Videla le dijo a Newsom en mayo de 1978 que había decidido invitar a la comisión. En junio, Montes y Allara torpedearon el esfuerzo en Washington. En agosto el Palacio envió a Cerdá a Washington para resolver los detalles de la visita. El compromiso fue reconfirmado durante la conversación entre Videla y Mondale y luego la Cancillería trató de torpedearlo una vez más cuando se le instruyó escribir una nota en borrador a la comisión. Finalmente el Palacio tuvo que escribir la nota en borrador, que la comisión aceptó. Fue en este punto en el que el ministro Arlia se enfureció en los pasillos de la Cancillería acusando a Videla de traición. Este pedazo de historia debería ser suficiente para demostrar que hay muchos dentro de este gobierno, y no sólo los militares, que se oponen a la visita. A pesar del buen record de La Prensa en derechos humanos ese escrito se opone a la visita en términos de dignidad nacional. De alguna manera, por sobre una sustancial oposición de los militares Videla obtuvo el compromiso de la visita. Dada la oposición que sabemos que existe no estamos para nada sorprendidos de ver reportes como aquél en relación a una instrucción a funcionarios locales de paralizar todas las investigaciones de la comisión. El reportado murmullo del general Menéndez (diciendo) que él no podría permitir a la comisión pisar su territorio es otro ejemplo de la reacción de aquellos que no están reconciliados con la visita. Este tipo de respuesta debería ser esperada y no sobreestimada”.*